



## **Informe de la Comisión Política del PCE**

I.- El asalto al Capitolio de Washington expresó la inclinación neofascista de Trump, pero el anterior presidente estadounidense no es la causa de los problemas y de la crisis de Estados Unidos: es apenas una consecuencia. La catastrófica situación en el país, con más de 500.000 muertos a causa de la pandemia, y el aumento de la pobreza en muchas ciudades, es la primera preocupación de Biden, que intenta combatir con su paquete de estímulos de 1'9 billón de dólares (1'5 billones de euros). Un billón está destinado a pagar el cheque de 1.400 dólares a cada ciudadano, y el gobierno pretende crear dieciocho millones de empleos.

Sin embargo, los signos preocupantes son muchos: Biden ha reabierto los centros de detención de menores inmigrantes, no quiere subir el salario mínimo, pese a que está paralizado desde 2009, y ha declarado que no va a subir los impuestos a los ciudadanos más ricos. En la composición de su gobierno ha elegido director de la CIA a William J. Burns, que participó en el diseño de la operación para destruir Yugoslavia y controló desde el Departamento de Estado las agresiones y guerras norteamericanas en Afganistán e Iraq, en la presidencia de Bush. Tampoco tranquiliza que el nuevo jefe del Pentágono sea Lloyd Austin, un veterano de las guerras de agresión en Iraq, Afganistán, que además arrasó Mosul. Sin olvidar a Victoria Nuland, nueva subsecretaria del Departamento de Estado, y organizadora del golpe de Estado del *Maidán* en Ucrania.

Junto a ello, hay una magnífica noticia: la prórroga del START III por cinco años, tal y como había sugerido Moscú, permite abrir un periodo de negociación sobre los arsenales nucleares, aunque ello no asegura que se detenga la carrera de armamentos que Putin ha afirmado que "empezó hace mucho tiempo". Una de las razones para el cambio de actitud del Pentágono sobre el START III, que querían dejar morir, ha sido la aparición de las nuevas armas tácticas y estratégicas rusas: el sistema de misiles *Avangard* y las nuevas armas hipersónicas que si bien, tras el anuncio de Putin, recibieron con incredulidad en Washington, ahora quieren incluirlas en el nuevo paquete a negociar.

El retorno estadounidense al *Acuerdo de París*, y a la OMS, son también rasgos positivos, aunque el acuerdo nuclear 5+1 firmado con Irán y abandonado unilateralmente por Estados Unidos, sigue en peligro, no solo porque Biden exige su cumplimiento estricto antes de levantar las sanciones que impuso Trump, sino

porque pretende incluir el programa de misiles iraní que no está contemplado en el 5+1. Al mismo tiempo, Biden ha anunciado la creación de un grupo de trabajo para "afrontar el desafío de China y ganar la competencia en el futuro". Es significativo que ese grupo de trabajo se haya creado en el Pentágono y no en una institución civil de investigación.

Tras el informe de la Relatora Especial de la ONU, Elena Douhan, emitido el pasado 13 de febrero en el que solicitaba el levantamiento de las medidas coercitivas contra Venezuela por ser contrarias al derecho internacional y porque existen evidencias claras que estas medidas influyen de forma negativa en el desarrollo social del país por sus efectos devastadores contra la población venezolana, la UE ha decidido hacer caso omiso a estas recomendaciones y ha optado por seguir con su política de injerencia sancionando a 19 funcionarios del Gobierno, lo que eleva la cifra a 55 funcionarios o altos cargos del Ejecutivo sancionados. Estos hechos han derivado en una serie de tensiones diplomáticas por las que Venezuela ha declarado *persona non grata* a la Embajadora de la UE en el país, dándole 72h para abandonar el mismo, mientras que la UE ha respondido haciendo lo mismo a la Embajadora de Venezuela en Bruselas. Volvemos a reiterar en la necesidad de que la UE dé un giro a su política exterior y respete la soberanía venezolana. En este contexto, el viaje de la ministra española de asuntos exteriores a la frontera colombo venezolana en Cúcuta acompañada de la ministra de exteriores colombiana, como ya advertimos, fue un grave error diplomático que provocó la protesta contundente de Venezuela por la utilización política en su contra de la emigración provocada por las ilegales sanciones económicas impuestas a la república bolivariana.

Ecuador afronta la segunda vuelta electoral el próximo 11 de abril entre la lista progresista de Arauz y la del candidato de la oligarquía, Guillermo Lasso. Tras una serie de intentos de desestabilizar el proceso electoral por parte de Yaku Pérez, tercer candidato tras la primera vuelta, intentando alcanzar el segundo puesto para medirse en la segunda vuelta con Arauz mediante reclamaciones sin base legal, así como de la Fiscalía y la Contraloría ecuatorianas que con la inestimable ayuda del Fiscal colombiano, no han cesado en sus intentonas golpistas contra la lista apoyada por el ex presidente Correa y con un CNE colaboracionista en estas intentonas, momentáneamente todo parece haberse calmado pero no podemos bajar la guardia ya que de aquí al 11 de abril los intentos de injerencia en el proceso puede que se agudicen.

Especialmente preocupantes para la izquierda ha sido el resultado de las elecciones en El Salvador el pasado 28 de febrero con la debacle del FMLN y una victoria sin paliativos del populismo de derecha extrema, que esperamos no vaya a influir en el resultado electoral ende Ecuador o Perú o Chile en el próximo mes de abril.

Trump, antes de abandonar la Presidencia, volvió a incluir a Cuba en la lista de "Estados patrocinadores del terrorismo" de la que había sido retirada en el año 2015. Este hecho dificulta la suavización del bloqueo contra la isla por parte de la nueva administración estadounidense. Simultáneamente se incrementa la agresión de la contra revolución, esta vez poniendo en marcha una campaña de ataques desde el ámbito cultural utilizando el denominado movimiento San

Isidro, a la vez que se ataca a quienes defienden el fin del bloqueo. En ese contexto el caso del embajador de la UE en Cuba, Navarro, ha merecido el apoyo de los eurodiputados del GUE y Grupo Verde, a raíz de los ataques recibidos por las fuerzas de la derecha por solicitar el fin del ilegal bloqueo a Cuba. Seguimos reiterando y trabajando en la exigencia del inmediato levantamiento de una medida criminal que desde hace 60 años menoscaba la vida de los cubanos y cubanas.

No podemos olvidarnos de denunciar la situación que vive Haití desde hace unas semanas. El país sigue sumido en una serie de protestas contra la corrupción y las violaciones de la Constitución por parte del presidente Moïse, protegido de EE. UU., quien ha seguido mermando los derechos de la población haitiana. Moïse que debería haber celebrado elecciones parlamentarias y presidenciales, lleva un año gobernando por Decreto, ha asegurado que seguirá gobernando hasta 2022. Todo ello en el país más pobre del hemisferio sur, destrozado por los acuerdos de libre comercio con EE. UU. y que vive en una continua desestabilización desde hace 35 años.

Con mucha cautela, el nuevo gobierno está reexaminando algunos aspectos de su política exterior. Con relación al Yemen, Biden anunció que Estados Unidos “pone fin a todo apoyo americano en las operaciones ofensivas en la guerra de Yemen, incluyendo ventas de armas”. Es un buen signo, pero eso no significa el final de la guerra yemení, la catástrofe humana más lacerante que existe hoy en el mundo. La inclusión de los hutíes en la lista de organizaciones terroristas es de una gran importancia, y Biden va a revisarla. Si decide mantenerlos en ella, la hambruna aumentará porque los hutíes controlan el territorio donde viven las tres cuartas partes de la población yemenita y dejarían de llegar los alimentos de ayuda humanitaria.

Biden ha hecho público el informe de la CIA sobre el asesinato de Jamal Khashoggi, para aliviar el creciente desprestigio de la actuación internacional de Estados Unidos y como forma de presión sobre Ryad para obtener nuevas concesiones, aunque no va a cambiar su política global en Oriente Medio. De hecho, el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, condenó los ataques fronterizos hutíes contra Arabia Saudí y expresó el compromiso norteamericano de ayudar a Ryad a “defender sus fronteras”. Significativamente, Austin no mencionó los bombardeos sauditas sobre el Yemen. Biden ha ordenado bombardear de nuevo Siria, causando decenas de muertos al este del país, y el Pentágono mantiene que “protegerá al personal estadounidense en el país” en una muestra de desprecio a la legalidad internacional, porque sus militares se hayan ilegalmente en Siria. En poco más de un mes de mandato, Biden ya ha bombardeado tres países: Siria, Iraq y Somalia. De hecho, las palabras de Biden ante la Conferencia de Seguridad de Múnich ilustran la escasa ambición de la nueva política exterior de Estados Unidos, que continuará la presión diplomática, militar, económica y propagandística hacia China y Rusia: la mejora de las relaciones internacionales no está en el horizonte inmediato.

Por su parte, el Consejo Europeo mientras sigue con las dificultades con suministro de vacunas, decidía lanzar un *Fondo de Defensa Europeo* y reforzar su vertiente militar para “ser más fiable para Estados Unidos y la OTAN”: una

cautelosa y tímida intención para tener una voz propia en situaciones de crisis que no oculta ni rompe la vieja subordinación a Washington. La Unión Europea inicia una nueva etapa con la entrada en vigor del Brexit, que lanza a una soledad a Gran Bretaña que no puede compensar con su alianza con Estados Unidos. Siendo miembro de la Unión Europea, Gran Bretaña podía desempeñar un papel relevante en el nuevo escenario multilateral, por lo que ahora deberá resignarse a la función de socio minoritario de Estados Unidos, aunque el Foreign Office siga recordando las viejas glorias del imperio británico.

Las elecciones presidenciales en Portugal han revalidado a Rebelo, y continúa la crisis abierta en Armenia, tras la firma del acuerdo de Moscú por Nagorno-Karabaj. El ejército está enfrentado al primer ministro, Nikol Pashinián, un partidario del acercamiento a la OTAN y a Estados Unidos, en una situación de creciente inquietud en el país. En la vecina Georgia, el primer ministro Giorgi Gajaria ha presentado la dimisión y ha sido sustituido por Irakli Garibashvili, a causa de la detención del dirigente de la oposición, Nika Melia, mientras la oposición acusa al gobierno de aplazar *sine die* la incorporación del país a la OTAN.

Cuando se cumple el 45 Aniversario de la proclamación de independencia la RASD, reiteramos nuestro apoyo a la independencia del pueblo saharauí y permaneceremos vigilantes ante la grave situación de los DDHH de la población civil saharauí y recordaremos a Marruecos que, tras la ruptura del alto al fuego provocada por su actitud intransigente, ahora el combate se encuentra en otro lugar y frente a un ejército, y que es una cobardía ensañarse y tomar venganza en la población civil del territorio que ellos ocuparon.

Especialmente preocupante es el incremento del apoyo militar de los EE. UU. a Marruecos en estos momentos de conflicto, con la realización de unas grandes maniobras militares aeronavales conjuntas con el reino alauí, en la zona colindante con el espacio aéreo español en Canarias, sin tan siquiera advertir antes a las autoridades españolas.

Además del ataque del Pentágono a Siria, el bombardeo israelí en varias localidades sirias, en enero de 2020, es otra flagrante vulneración del derecho internacional y un acto de guerra, y también la evidencia de que Netanyahu quiere mostrar fortaleza durante la inminente campaña electoral, y está dispuesto a iniciar la guerra con Irán: solo le detiene la negativa norteamericana, que teme que un ataque israelí degenerase en una conflagración regional e incluso global.

La dura represión en Irán, con sindicalistas y militantes de izquierda condenados a largas penas de prisión, y el golpe de Estado en Birmania del 1 de febrero, ponen otra vez ante los ojos del mundo la difícil situación de los partidos comunistas y de la izquierda en muchas regiones. Tanto el Tudeh como el Partido Comunista de Birmania son ilegales, y el golpe de Estado del *Tatmadaw*, que ha desalojado a la Liga Nacional para la Democracia de Aung San Suu Kye, un partido liberal, ha abierto un nuevo escenario de enfrentamiento entre China y Estados Unidos, con la participación secundaria de la India. En el fondo del escenario, la pretensión norteamericana de atraerse a Birmania a su coalición

anti china y detener el desarrollo del corredor birmano de la nueva *ruta de la seda* que tiene en el puerto de Kyaukpyu una vía de entrada de hidrocarburos para China, y que comunica con la ruta comercial del océano Índico.

En Kirguistán, Sadyr Japarov ganó las elecciones presidenciales en enero, mientras el opositor Adajan Madumarov obtenía menos del 7 % de los votos. Japarov sustituirá a Sooronbai Jeenbekov, que dimitió tras los enfrentamientos de octubre de 2020. Las enmiendas constitucionales han modificado el régimen político del país.

La crisis en Sudán se agrava con nuevos enfrentamientos en Darfur occidental, donde milicias armadas asesinaron a un centenar de personas. En Uganda, de nuevo el anticomunista Yoweri Museveni, partidario del liberalismo económico, ganó en enero de 2021 unas elecciones marcadas por el fraude y la represión, enfrentado al candidato opositor de centroizquierda, Bobi Wine. El ejército ha causado decenas de muertos en el país en los últimos meses. En la República Centroafricana, la celebración de elecciones en enero con la reelección del presidente Faustin-Archange Touadéra, fue seguida del asalto a la capital del país, Bangui, por grupos armados que fueron rechazados por tropas del gobierno, ayudadas por fuerzas rusas y de la MINUSCA, la fuerza de la ONU en el país. La situación es muy preocupante: más de cien mil personas han huido a los países vecinos huyendo de los grupos armados. La nueva guerra en Etiopía agrava la tensión en la región del cuerno de África, afectando a nuevos países: soldados de Eritrea causaron una matanza en febrero asesinando al menos a ochocientas personas en Axum, ciudad de Etiopía, y abandonaron los cadáveres en las calles, en la guerra del Tigré que enfrenta al gobierno etíope con los tigríños. A destacar, el papel que desempeñan los Emiratos Árabes Unidos, que facilitan armamento a Etiopía. África ofrece también noticias estimulantes: la República Democrática del Congo y Botswana se unen a la nueva *ruta de la seda*. Con ellos, solo en África, ya son 46 países los que se han incorporado a la iniciativa china que puede abrir nuevas perspectivas de colaboración y pacificación en muchas regiones africanas.

La cumbre virtual del G-7, pasó sin pena ni gloria, pese a la presencia del nuevo presidente norteamericano. La cumbre apenas abordó la situación creada por la pandemia y los programas de vacunación, aprobando un decepcionante compromiso de 4.000 millones de dólares para apoyar la vacunación en los países pobres, que puede quedar en mero anuncio. Tanto China como Rusia están enviando cargamentos de vacunas a países de cuatro continentes.

A destacar y tener en cuenta, la próxima conferencia de la ONU sobre el cambio climático.

## **II.- Ante las evidentes dificultades políticas, económicas y sociales que atraviesa España, es sumamente importante la presencia de Unidas Podemos en el gobierno en estos momentos**

La mejora de los datos sanitarios de afectación de la pandemia, no pueden ocultar el empeoramiento de la situación económica y social y las últimas

previsiones de recuperación económica, sin duda más negativas de lo hasta ahora esperado.

Nos enfrentamos a un escenario de crisis económica y social provocada por la pandemia que va a durar bastante tiempo y probablemente veamos un endurecimiento de las condiciones de vida de las clases trabajadoras en especial de los sectores juveniles

El desempleo ronda los 4 millones de personas en España a pesar de existir casi un millón de puestos de trabajos mantenidos con los ERTes. El desempleo juvenil alcanza el 40% y la precariedad laboral no descienden. Mas de 600.000 personas se han sumado al colectivo que tiene que acudir regularmente a los bancos de alimentos para garantizar su alimentación. El COVID pone de manifiesto las desigualdades de clase, al igual que afecta más duramente a las clases trabajadoras. Los últimos estudios ponen de manifiesto que en colectivo profesional más contagiado no ha sido el de sanitarios, sino el de limpiadores, con un 11% de incidencia más que el personal sanitario y con condiciones laborales claramente peores. No olvidamos que de entre todas las ocupaciones, el 4,3% de las mujeres ocupadas trabajan como empleadas domésticas, y un 6,4 en otros empleos relacionados con la limpieza. La proporción de hombres que son empleados domésticos es casi testimonial (0,1%) mientras que el 1% se dedica a otros empleos de limpieza.

La mortalidad derivada de la pandemia también afecta más a los barrios populares que a las zonas de mayor nivel de renta y los contagios son más elevados entre la población que dispone de menos metros cuadrados de vivienda por personas.

Especialmente preocupante es el impacto de las crisis derivadas de la COVID19 en las mujeres. El paro femenino se incrementó en el mes de enero en 48.254 mujeres (2,17%) con relación al mes de diciembre, hasta un total de 2.273.375 inscritas. El desempleo masculino aumentó, con 27.962 inscritos más (1,68%) y se sitúa en un total de 1.690.978 personas. Además, la crisis de la COVID 19 ha sido especialmente difícil para las mujeres, en gran medida por la sobrecarga del trabajo sanitario (66% del personal sanitario: el 51 % en medicina, el 84 % en enfermería, el 72 % en farmacia, el 82 % en psicología y el 84 % del personal de residencias para mayores y personas dependientes) y servicios esenciales, la mayor responsabilidad en las tareas domésticas y de cuidados (las mujeres asumen la mayor parte del trabajo doméstico y el 70 % de las tareas de cuidados y 56.600 mujeres han dejado su trabajo por esta causa en el 3T de 2020, frente a 8.000 hombres), la mayor pobreza y precariedad laboral y el aumento del riesgo de sufrir violencia de género.

Hoy es más necesaria la existencia de un Gobierno de coalición de izquierdas en España en el que nuestro partido pueda mantener influencia para pelear medidas que garanticen y extiendan los derechos de las clases trabajadoras, a pesar de las innumerables contricciones y confrontaciones que mantenemos a diario.

Es necesario mantener, extender y mejorar el denominado escudo social e impedir por todos los medios que retornemos a las políticas de recorte y austeridad que se aplicaron implacablemente en la última crisis económica por ello sigue siendo una necesidad el gobierno de coalición para España y para la clase obrera. No perdamos de vista que al permanente trabajo de mejora de los derechos sociales -prohibición de cortes suministros y desahucios, mejora IMV, subidas SMI, etc.- se suman ahora la puesta en marcha de nuevos programas de apoyo al tejido industrial y productivo con 11.000 millones de euros de ayudas a las pequeñas y medianas empresas.

Desde el primer día hemos soportado una ofensiva brutal de desgaste por la presencia de Unidas Podemos en el gobierno. No es del agrado de la oligarquía. Pero el PSOE sabe que no hay alternativa de Gobierno de izquierdas sin Unidas Podemos en él, incluso aunque una crisis en el seno de la coalición obligaría a repetir las elecciones. En ese caso, existe el riesgo de que la derecha y la ultraderecha consiguieran una mayoría que les permitiera gobernar, pero -sin predeterminedar la posición que adopte nuestro partido llegado el momento- sería prácticamente imposible que el PSOE pudiera gobernar en solitario sin recurrir a un muy improbable pacto con el PP o reproducir el actual acuerdo con UP.

Es evidente la frustración de la derecha y su política de tierra quemada porque no hay caída de UP en las encuestas y el resultado de En Comú Podem en las elecciones en Cataluña ha sido positivo, dado que se ha parado la tendencia al descenso de Unidas Podemos que hemos vivido en el ciclo autonómico y obtenemos la suficiente representación y apoyo popular como para que sea posible un Gobierno de izquierdas en Cataluña que retorne el debate al eje de confrontación entre capital y trabajo y que acabe con el pernicioso y paralizante eje de confrontación entre independentismo y españolismo. Sin duda ha sido importante para obtener estos resultados electorales positivos, el hecho de que Unidas Podemos haya introducido en la discusión de la campaña electoral otros elementos diferentes de la cuestión nacional catalana, como ha sido el debate sobre las distintas situaciones de anomalía democrática que soporta España, es decir, los déficits democráticos por recortes de libertades o deficiente funcionamiento institucional. Creemos que retomar el eje de confrontación entre capital y trabajo y el énfasis realizado en la defensa del modelo de Estado federal, ambos ejes políticos propios de la cultura del PSUC - que fue hegemónica en la izquierda catalana y sirvió para integrar a la clase trabajadora migrantes desde distintos lugares de España en la cultura nacional de la Cataluña industrial- ha sido un acierto de la campaña electoral que ha facilitado los buenos resultados.

Unidas Podemos es leal al acuerdo de gobierno de coalición, y exigimos a diario la misma lealtad al otro socio de la coalición para el cumplimiento estricto del acuerdo programático de Gobierno. Mantenemos el difícil equilibrio entre la exigencia de permanente aplicación del acuerdo de Gobierno de coalición el apoyo a las medidas que va adoptando el Gobierno en distintas materias y la toma de posición crítica cuando no compartimos medidas adoptadas por el socio mayoritario de Gobierno. Es evidente que tenemos posiciones políticas distintas, pero lo que defiende y necesita nuestro electorado y nuestro pueblo

es un Gobierno lo más a la izquierda posible capaz de llevar adelante las medidas del acuerdo programático de coalición.

Y esa exigencia no se consigue únicamente con el trabajo institucional, sino que es imprescindible organizar movilización social para alterar a nuestro favor la correlación de fuerzas.

En nuestra última reunión del Comité Central acordamos presentar en el Congreso una propuesta de reforma para acabar con el voto rogado y otra propuesta de reforma del Código Penal, para garantizar la libertad de expresión y despenalizar los delitos por los cuales han sido condenados distintos cantantes, artistas y activistas de las redes sociales.

Unidas Podemos ha presentado ya ambas Proposiciones de ley y en concreto esa reforma del Código Penal, a la vez que ha solicitado el indulto a Pablo Hassel y Valtonyc. En estos momentos trabajamos para garantizar que ambos procesos lleguen a buen término en el menor tiempo posible. Igualmente hemos apoyado las movilizaciones por la libertad de los artistas encarcelados y hemos manifestado claramente que defendemos la libertad de expresión y que nadie puede ser privado de su libertad por sus manifestaciones o expresiones, al margen de que coincidamos o no con ellas, cómo es el caso que últimamente ha ocupado la opinión pública respecto al encarcelamiento del rapero Pablo Hasél.

Las primeras manifestaciones en apoyo al cantante encarcelado han puesto de manifiesto una importante influencia y penetración en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de sectores ultraderechistas, dirigidos políticamente desde la ultraderecha política española. Al margen de lo que está ocurriendo en Cataluña, coyuntura claramente atravesada por el fracaso del proceso independentista, sin duda hemos visto manifestaciones en las que lejos de garantizarse el derecho fundamental de manifestación han acabado en escenas de violencia debido a la pésima actuación policial, escenas que han sido provocadas y utilizadas para atacar al Gobierno de coalición.

Otros factores que sin duda influyen en las expresiones de una mayor indignación en las movilizaciones de estas semanas, es la frustración que se va acumulando en importantes sectores sociales, especialmente entre la gente más joven que no percibe garantías sobre un futuro con condiciones de vida dignas. El empeoramiento de las condiciones económicas, laborales y por tanto sociales, son el caldo de cultivo del estallido de indignación y movilizaciones al que hemos asistido también en Linares. Si bien es cierto que las movilizaciones se han iniciado como respuesta a la inaceptable actuación de unos indignos miembros de la policía nacional que estando fuera de servicio se comportaron como auténticos delincuentes apaleando sin motivo alguno a una familia, los antecedentes de frustración social de la antigua localidad industrial, a consecuencia de la des industrialización provocada por las políticas neoliberales, así como los posteriores recortes sociales, son los factores que explican las importantes movilizaciones de una población indignada que apenas veinticuatro horas antes de estallar el conflicto se había indignado nuevamente por la decisión del gobierno de no abrir el centro logístico del

Ejército de Tierra en la provincia de Jaén, medida que habría significado una modesta creación de puestos de trabajo pero que habría invertido la tendencia de pérdida imparable de puestos de trabajo y por lo tanto de despoblamiento.

A pesar de las acusaciones recibidas por Unidas Podemos, es evidente que en ningún momento hemos alentado a la violencia y mucho menos a una violencia indiscriminada que es contraria a nuestros intereses. También hemos manifestado nuestra preocupación por la evidente utilización de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por la otra derecha política para desestabilizar la situación política y en concreto al Gobierno. Y reiteramos la urgencia de que cualquier persona encarcelada por delitos relacionados con la libertad de expresión sea puesta en libertad de inmediato, así como que se lleve adelante la reforma del Código Penal necesaria para que España deje de ser uno de los países del mundo con más condenas por actos de libertad de expresión valga recordar que en aproximadamente 65 ocasiones el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha tenido que censurar la actuación de los tribunales españoles en la materia.

Los comunistas sabemos qué el socialismo y la defensa de los derechos de los trabajadores no se consiguen ni garantizan mediante la utilización de violencia de forma indiscriminada, máxime cuando esta situación puede ser utilizada políticamente en contra nuestra, como está ocurriendo. No cabe duda de que las actuaciones vandálicas ocurridas en Cataluña al final de las manifestaciones pro libertad de expresión ayudan objetivamente a los intereses de las fuerzas políticas que quieren evitar la conformación de un Gobierno de izquierdas en Cataluña, tanto sectores de la derecha españolista como sectores independentistas radicales -de derechas y también izquierdistas- que coinciden en trabajar por que se alcance un Gobierno de fuerzas independentistas con presencia determinante de la derecha independentista catalana en lugar de facilitar un gobierno de izquierdas federalista. Prefieren un Gobierno con la derecha neoliberal catalana antes que un Gobierno de izquierdas con fuerzas no independentistas. Es imprescindible salir de la trampa del radicalismo, ya sea izquierdista o independentista, que provoca la violencia contra cualquier gobierno, incluso contra el Gobierno municipal de Barcelona desempeñado por nuestros compañeros y compañeras de En común Podem, espacio político en el que participa nuestro partido hermano en Cataluña. No cabe duda de que, en este momento, a quien menos le interesa el mantenimiento de esta violencia gratuita que abre telediarios, es a los socios del gobierno de coalición y a los defensores de medidas para recuperar la libertad de expresión.

**III.-** La actual situación política pone de manifiesto una agudización de la confrontación y las contradicciones en el marco de la lucha de clases, consustancial al sistema capitalista, confrontación que se disputa en toda la sociedad, incluidas las instituciones y en el gobierno, debido a la presencia de Unidas Podemos en él en estos momentos.

Si algo ha puesto de manifiesto la pandemia ha sido la incapacidad del capitalismo y en especial de las políticas neoliberales para garantizar la

seguridad humana y por supuesto los derechos de la clase obrera, además de unas condiciones de vida dignas para las mayorías sociales.

Coincidiendo con la desaparición del socialismo real en Europa del este, las políticas neoliberales enterraron conscientemente la versión dulcificada del capitalismo defendida por la socialdemocracia, teorizada por el keynesianismo y conocida como Estado del bienestar. La reducción del Estado a su mínima expresión, la desregulación laboral y de la garantía de los derechos fundamentales y la privatización y potenciación de la actuación descontrolada e incoherente del denominado libre mercado, ha derivado en una situación de absoluta falta de soberanía económica e industrial y por lo tanto política. En España comprobamos con el inicio de la pandemia que la desaparición de la industria nacional hacía imposible disponer de recursos básicos de supervivencia como las mascarillas los EPIs o los respiradores imprescindibles para garantizar la vida de nuestros compatriotas.

Ahora tenemos una importante ocasión para intentar reconducir esta situación y poner en marcha un proceso de reindustrialización que además de ayudarnos a recuperar la soberanía económica política y social de España garantice el mantenimiento y desarrollo de una clase trabajadora especializada y numerosa, vinculada a la producción industrial de nuevo tipo que requiere el desarrollo científico técnico del mundo contemporáneo. No va a ser fácil, pero es nuestra obligación intentarlo.

La oligarquía pretende evitar la puesta en marcha de un debate sobre la aplicación de los fondos europeos, 190.000 millones de euros para España en su mayoría recursos no reembolsables. Su aspiración es proceder a su reparto entre los grandes grupos económicos vinculados al Ibex 35, como se infiere de las 30 fichas de programas de reconstrucción propuestas por el Ministerio de Economía.

Mientras no exista un acuerdo sobre política de reindustrialización -sobre los ejes de la transición energética, la digitalización y la biotecnología- será sencillo que el capital transnacional y las oligarquías alcancen su objetivo de convertir al Estado en un mero gestor del reparto de fondos europeos, considerados como simples subvenciones a grupos económicos, como si se tratara de un proceso en el que el Gobierno determina los requisitos de unas subvenciones y decide a qué grupos económicos se les entregan, para posteriormente limitar a fiscalizar el gasto efectuado.

En la práctica el diseño de los programas presentados a la Unión Europea por el Ministerio de Economía supone un riesgo de que se proceda de esta manera, al reparto de los fondos europeos obviando un debate sobre la estrategia de construcción de país que necesita España para recuperar su soberanía industrial.

El debate sobre la aplicación de los fondos europeos de reconstrucción es una oportunidad para que el bloque de la izquierda política transformadora, junto con los sindicatos y otros aliados, propongan un nuevo modelo de

reindustrialización que haga que España abandone la ruta de conversión en un país de servicios al turismo y bancarios.

Esta es uno de los más importantes retos del futuro de nuestro país y de la clase trabajadora y nuestra posible influencia en las decisiones que le afectan es una de las causas de ataques a nuestra presencia en el Gobierno. No cabe duda de que para la oligarquía sería mucho más fácil proceder al reparto de los recursos sin correr el mínimo riesgo de que existiera la posibilidad de variar el modelo económico, sin que Unidas Podemos y nuestro Partido estuvieran en el Gobierno y trabajen por poner en marcha una alternativa al actual modelo productivo y a la vez efectuar un control de la utilización de estos fondos desde las instituciones en que participamos.

La elaboración de propuestas estratégicas sobre el modelo económico e industrial de España en el futuro inmediato, así como la búsqueda de actores sociales económicos y políticos que puedan ser nuestros aliados a la hora de definir un modelo de recuperación de la soberanía económica e industrial, debe convertirse en un objetivo esencial para el Partido Comunista de España y para Izquierda Unida en los meses venideros.

Unidas Podemos debe poner en marcha de inmediato grupos de trabajo con expertos, sindicatos, centros de estudios e investigación, economía social, administraciones locales con capacidad de impulso económico y empresas de capital nacional, cuyos intereses sean contrarios a los de los grandes grupos multinacionales que controlan el Ibex 35. Es imprescindible construir propuestas que cuenten con el apoyo de sectores empresariales nacionales dispuestos a disputar el modelo frente a los intereses de oligopolios y las grandes multinacionales.

El desarrollo de unas propuestas productivas entorno a los ejes de transición energética, digitalización de la economía y biotecnología -vinculados a un nuevo diseño de la enseñanza y en especial de la formación profesional y la enseñanza universitaria vinculada a la tecnología- es el paso previo para a continuación disputar en la sociedad y en los centros de Gobierno a los que tenemos acceso, el debate sobre cuál modelo debe acordarse, si el del reparto de fondos de forma incoherente entre los grupos económicos más poderosos, o el de la puesta en marcha de un proceso coherente de reindustrialización controlado por instituciones del Estado, en donde la SEPI o un organismo similar tendrá que jugar un papel de coordinación y dirección para recuperar el máximo de soberanía económica de España.

El simple anuncio por nuestra parte de la necesidad de abrir ese debate, y más todavía de la necesidad de construir una propuesta alternativa de reindustrialización de España, va a significar una auténtica declaración de guerra a las oligarquías nacionales supeditadas a los intereses económicos transnacionales y globalizados.

Por lo anterior, sumado al empeoramiento de la crisis económica y el malestar social que ello conlleva, debemos salir de inmediato sobre el debate político respecto a la procedencia o no de la violencia en la lucha política. El Partido

Comunista de España reitera su apoyo a todos los jóvenes antifascistas y a las manifestaciones celebradas las últimas semanas tal y como han manifestado distintos portavoces de nuestro partido de Izquierda Unida y de Unidas Podemos, pero dejarnos situar los sucesos violentos de las manifestaciones por la libertad de expresión como centro del debate político, aparta la atención de la sociedad y de nuestro pueblo de los debates más importantes en este momento sobre el modelo de país que defendemos y las medidas contundentes que debemos adoptar para garantizar los derechos de los trabajadores.

Los retos políticos exigen ampliar urgentemente el marco de las libertades públicas, máxime considerando el proceso de movilizaciones que debemos contribuir a organizar para evitar la paralización de nuestra agenda política. Para el PCE es prioridad sacar adelante las reformas no solamente del Código Penal sino también de la ley de seguridad ciudadana, y en especial las reformas laborales y las leyes de igualdad que se defienden desde los ministerios que dirigimos.

Nuestra estrategia debe dirigirse a poner en marcha todas las medidas contempladas en el acuerdo programático del Gobierno de coalición así como a resaltar la realidad de las distintas anomalías democráticas que existen en el funcionamiento de la institucionalidad en nuestro país, anomalías en las que los medios de comunicación de mayor alcance -todos ellos propiedad de importantes grupos económicos- desempeñan un importante papel como actores políticos empeñados en impedir el desarrollo de cualquier propuesta de progreso y transformadora de la realidad y en concreto empeñados en combatir no solamente nuestra presencia en el Gobierno sino nuestra existencia como organizaciones políticas y como espacio político organizado en torno a Unidas Podemos.

El avance de la reforma laboral está sometida a una gran presión en estos momentos. No acaba de concretarse el acuerdo que permita la aprobación de la ley de Raiders, norma que reconozca derechos laborales a estos colectivos. Constituye el primer paso para recuperar la prevalencia de las relaciones laborales frente a la mercantilización del trabajo por cuenta ajena. Para impulsar la reforma laboral es imprescindible continuar incrementando la presión política y dar el necesario apoyo a los sindicatos, para que organicen eficazmente la movilización de la clase trabajadora que facilitará la aprobación de la reforma laboral. Es imprescindible recuperar la intensidad de las movilizaciones laborales, aún en condiciones de pandemia, durante todo el periodo en el que esté en marcha el proceso de diálogo social entre el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y las organizaciones empresariales. El proceso de diálogo social es la antesala para que las propuestas de reforma legislativa que concreten la reforma laboral puedan llegar al Consejo de ministros, y la movilización sindical es el presupuesto para que ese dialogo permita llegar a resultados favorables a la clase trabajadora. Sabemos que nuestra actuación obliga a tener un brazo en las instituciones y otro en la organización de las movilizaciones sociales y laborales.

Tenemos muy presente que corresponde a la dirección central del Partido la organización del trabajo para hacer que avanece el cumplimiento del acuerdo

de coalición en el Consejo de Ministros, así como la elaboración de las líneas de trabajo político de todo el PCE. A la vez, corresponde a las direcciones territoriales concretar estas líneas de trabajo político y en lo concreto organizar las movilizaciones sociales y el trabajo de nuestras organizaciones de base en el conflicto social. Llamamos a todas las organizaciones del partido a que incrementen el trabajo de organización de estas movilizaciones en cada territorio, en un momento en que hemos coincidido en la necesidad de incrementar la organización del inminente conflicto social derivado de las duras consecuencias de la pandemia.

**IV.-** Las últimas semanas se han multiplicado las dificultades para alcanzar acuerdos en el seno del Gobierno de coalición. Ya hemos indicado los desencuentros en torno a las leyes de Igualdad y ley Trans, a la ley de Vivienda, a las ya mencionadas reformas del Código Penal, la subida del salario mínimo o el contenido e impulso de la reforma laboral.

Cada uno de estos desencuentros es aprovechado por la derecha política, mediática y económica para desestabilizar el Gobierno de coalición. La diferente utilización en esta operación de desestabilización de determinados sectores de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado también resulta muy obvia. Preocupan las dificultades del Ministerio de Interior para impedir el incremento de la influencia de la ultraderecha en los cuerpos policiales, escenario preocupante cuyas consecuencias ya hemos visto en otros momentos y otros lugares cuando las fuerzas de izquierda han accedido a gobiernos así sea de forma modesta. Sin necesidad de remontarnos a la desestabilización sufrida por el Gobierno del presidente Allende en Chile, como ejemplos más cercanos recordemos el golpe de Estado finalmente revertido de Venezuela del año 2002 y el levantamiento policial contra el presidente Correa en Ecuador en el año 2010.

Para los comunistas en cada momento político es necesario saber identificar correctamente al enemigo. Unidas Podemos es en estos momentos una fuerza de Gobierno y de lucha popular a la vez. No podemos confundir nuestras justas críticas y pugnas con nuestros socios de Gobierno con la identificación como nuestros enemigos de clase a las oligarquías económicas y a la ultraderecha política, ambos sin duda los más poderosos y organizados enemigos de las clases trabajadoras.

Estas semanas hemos vuelto a constatar el gran enfrentamiento político por la renovación de las instituciones constitucionales del Estado, concretamente el Consejo del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y otras instituciones menores. En esta pugna la derecha claramente ha situado como línea roja la presencia en esas instituciones de Unidas Podemos, lo que denominan las "fuerzas comunistas" en términos generales, poniendo de manifiesto que el poder real del Estado probablemente se encuentre en algunas de estas instituciones que no se someten a control directo ni a mecanismos de elección directa por los ciudadanos. El Partido Comunista de España defiende que la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno de coalición no solamente puede significar la dirección por este espacio político de una serie de ministerios

con competencias limitadas, sino que la consecuencia más importante del acuerdo de coalición debe ser el levantamiento de cualquier veto para que UP contribuya a la reforma y renovación de todas las instituciones del Estado. Máxime cuando la fuerza política que pretende vetar a Unidas Podemos, el PP, obtuvo 5 millones de votos frente a los 3 que obtuvo UP.

Los vetos e intentos de exclusión de cualquier espacio democrático a Unidas Podemos, a Izquierda Unida o al Partido Comunista de España no solamente son inaceptables, sino que son impropios de una sociedad que se reclame democrática. Recordemos que fue el Partido Comunista de España quien sin duda alguna más contribuyó a la construcción de la democracia en España algo que han olvidado algunos sectores del Poder Judicial, como pone de manifiesto la vergonzante declaración del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla León, el señor Concepción para quien la presencia de comunistas en el Gobierno sería síntoma de falta de democracia. No es de extrañar por tanto la permisividad de muchos jueces con expresiones reaccionarias que rayan en el terrorismo, como la de los militares retirados que pedían fusilar a millones de españoles.

**V.-** De cara a las movilizaciones del 8M, es fundamental señalar que tanto la derecha como la extrema derecha están aprovechando el contexto para criminalizar de nuevo al movimiento feminista y a cualquier movilización que realice. Como Partido tenemos clara nuestra participación en toda movilización se hará siempre siguiendo los protocolos sanitarios sobre el COVID, pero lo que no vamos a permitir es que se señale a las mujeres como responsables de la pandemia, cuando han sido especialmente ellas las que han estado en primera línea luchando contra el virus, tanto en las profesiones sanitarias como en todos aquellos trabajos de cuidados que han sido esenciales durante el confinamiento y las restricciones de movilidad y continúan siéndolo en este momento.

La pandemia ha agudizado las desigualdades de género y de clase, por ello el partido este 8M con el lema: ¡Esenciales en la vida y en las luchas! vamos a seguir reivindicando la redistribución justa y equitativa de la riqueza y de los cuidados.

En nuestras reivindicaciones reclamamos que el anteproyecto de ley de libertad sexual del Ministerio de Igualdad ¡sea ley! No queremos que se sigan cuestionando a las víctimas, ni agresores que salgan impunes.

Queremos un Sistema estatal de cuidados que garantice cuidados dignos y universales a lo largo del ciclo vital de las personas. Porque la actual organización social de los cuidados es injusta e insostenible.

Rechazamos la mercantilización del cuerpo de las mujeres y seguimos reivindicando la abolición de la prostitución y nos negamos a cualquier intento de legalización de los úteros de alquiler en España y abogamos por construir un nuevo internacionalismo basado en la defensa de la vida, la igualdad, la justicia y la paz.

El derecho a la Vivienda ocupa un papel muy destacado en el Acuerdo de Gobierno suscrito entre Unidas Podemos y el PSOE. De hecho, el texto del acuerdo reconoce como un eje básico esta cuestión capital y le dedica un capítulo específico que aparece recogido en el epígrafe 2.9 de dicho texto. La premisa es la consideración de la vivienda como derecho y no como mercancía. Debemos tener muy presente que el problema de acceso y la garantía de vivienda ya era un problema acuciante antes de la crisis provocada por la pandemia, y que se recrudece como efecto directo de la misma, al dejar sin recursos suficientes a cientos de miles de familias. Mientras para muchísimas personas en nuestro país no hay vivienda, según las estadísticas elaboradas por el INE, existen cerca de 3 MM de viviendas vacías en manos de bancos, fondos buitres, y el SAREB.

En este contexto, la Iniciativa puesta en marcha por las organizaciones sociales y sindicales (CCOO, UGT, Intersindicales, ...) y formalizada en el Congreso de los Diputados la semana pasada en el encuentro mantenido con diferentes Grupos Parlamentarios, entre los que destaca el nuestro, es una magnífica palanca y punto de apoyo a la hora de impulsar una Ley que garantice el Derecho a la Vivienda, y lleve a cumplimiento lo pactado. Las reticencias manifestadas por el PSOE respecto al control de los precios de alquiler, no debe hacernos obviar que más allá de esa cuestión, no poco importante, los objetivos que nos marcamos pasan por la construcción de un auténtico parque social de vivienda pública de orientación social y acabar con las prácticas especulativas de un oligopolio rentista que se niega a la pérdida de ingresos a costa de mercadear con las necesidades de la mayoría social.

La Iniciativa por un Ley que garantice el Derecho a la Vivienda debe contar con el máximo respaldo de todas las organizaciones territoriales del Partido tejiendo una amplia alianza, de propuesta, debate y movilización, que impulse un mecanismo legal eficaz ante un problema sistémico que plantea el modelo económico neoliberal, y que a la vez refuerce el papel de Unidas Podemos como mecanismo de confluencia en la lucha por los derechos sociales.

Respecto a la importancia del Ingreso Mínimo Vital acordado por el gobierno, los datos recogidos hasta el momento como consecuencia de la crisis económica y social provocada por la pandemia nos obligan a tener muy presente a todos los sectores en los que la destrucción de empleo provoca una fuerte crisis social. No se puede perder de vista que la protección que se brinda a través de mecanismos integrados en las medidas del Escudo Social, como los ERTes, se producen en el marco de una década de impacto de la última reforma laboral que mermó con mucho las condiciones de las relaciones laborales. Por ello, la protección debe tener muy en cuenta la carencia de recursos que se agrava como consecuencia de la pérdida de ingresos por pérdida de empleo. Y, sobre todo, a quienes se desenvuelven en la más absoluta precariedad y que no están regulados por contrato alguno inmersos en la economía sumergida.

Debemos seguir trabajando por mejorar el ingreso Mínimo Vital, convirtiéndolo en un auténtico mecanismo de protección individual y familiar para quienes carecen de lo más básico. Han sido muchas las propuestas que hemos

impulsado a partir del análisis de la implementación del IMV, pero merece la pena destacar la batería de propuestas desplegadas por nuestro Grupo Parlamentario, y presentadas el pasado 9 de febrero, como enmiendas al Proyecto de Ley por el que se establece el IMV. Destacamos por su concreción, las medidas tendentes a agilizar la tramitación de los expedientes de estas prestaciones; la simplificación de los procedimientos; la revisión de los requisitos y de la forma de acreditación de los mismos; y la necesidad de reconocer las situaciones provocadas por la pérdida sobrevenida de ingresos.

Las anteriores líneas de intervención suponen mejoras concretas, que tienden de manera pormenorizada a alcanzar los objetivos que hemos venido señalándonos. Y deben ser compartidos con todos aquellos colectivos, organizaciones sociales y sindicales con las que hemos compartido diagnósticos, propuestas y el resultado de este importante trabajo político desarrollado por nuestro grupo parlamentario.

Tras la presentación en el Consejo de Ministros del pasado 16 de febrero del informe sobre bienes inmatriculados por la Iglesia Católica, el PCE debe impulsar un desarrollo legislativo que permita su recuperación para el dominio público, de esta forma, se llevaría a cabo lo previsto en el punto 5.11 del acuerdo de legislatura entre el PSOE y Unidas Podemos. Para ello es importante poner en marcha una amplia movilización social desde cada uno de los territorios que permita identificar los bienes de su patrimonio cultural usurpados, campaña que debemos desarrollar en cada territorio en el espacio de Unidas Podemos y con el apoyo de cuantos colectivos de defensa de la laicidad y en especial de defensa de la cultura, centrándonos en destacar los bienes culturales usurpados por la Iglesia en cada localidad. Al igual que el Ministerio de Cultura debe reclamar por todas las vías a su alcance todos los bienes que figuren en su inventario de patrimonio histórico, deben hacerlo el resto de administraciones públicas, en especial con mociones en las asambleas de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

**VI.-** La situación política abordada en este Informe nos lleva a recordar que la actual coyuntura de confrontación política, sin duda alguna anuncia un agravamiento de la crisis económica y social. Es previsible que se agudicen las contradicciones sociales y por tanto la lucha de clases y ello exige que las fuerzas populares refuercen su organización y se fortalezcan puesto que nuestros enemigos son poderosos y cuentan con recursos que hoy por hoy no están a nuestro alcance. Estamos obligados a reforzar las filas del Partido Comunista de España y de Izquierda Unida, Pero en estos momentos de forma especial y como hemos analizado en nuestro último Comité Central, es obligación de los comunistas superar todo tipo de desavenencias internas en el espacio de Unidas Podemos, fortalecerlo y avanzar en su consolidación organizativa, con la finalidad de abordar las batallas políticas que vienen de la forma más organizada posible y con mayores garantías de éxito.

Esta Comisión Política está mandatada por el CC para tomar posición sobre la fase final de la Asamblea Federal de IU, por lo que aportamos una valoración de la Comisión que, también por mandato del CC, está coordinando nuestra

participación en el proceso asambleario. Aunque falten por celebrarse algunas Asambleas de Federación y pueda haber algún cambio menor en nuestra candidatura, estamos en condiciones de plantear una valoración general y tomar la decisión que corresponda, teniendo en cuenta que estamos ante una Asamblea Federal y por tanto los documentos y la candidatura que se presentan representan globalmente a todo el PCE y por lo tanto no corresponde tomar posiciones diferenciadas en algún territorio.

De esta manera con los datos que tenemos sobre la marcha tanto del proceso de debate de los documentos como de la precandidatura presentada, estamos en condiciones de plantear al conjunto del Partido que tanto documentos como candidatura, reflejan, con carácter general, muy positivamente las propuestas que ha venido haciendo el PCE. Por ello, la Comisión Política hace un llamamiento para que todas las organizaciones del Partido trabajen abiertamente para que se obtengan los mejores resultados al final del proceso asambleario.

Al mismo tiempo hay que seguir trabajando en la culminación del proceso asambleario, de manera que, si hubiera un cambio sustancial en lo que actualmente está presentado, correspondería convocar una nueva reunión para valorarlo. También hay que seguir trabajando en la redacción de las resoluciones propuestas por la Coordinadora Federal para que clarifique tanto las propuestas políticas como nuestra apuesta por la Convergencia.

Madrid, 5 de marzo de 2021